

Religiosidad política y proceso electoral en el Perú

Ricardo Melgar Bao

Como es de todos conocido, el proceso electoral en el Perú concluyó con el virtual triunfo del ingeniero Alberto Fujimori, novísimo líder de *Cambio 90*. Una organización política de peculiar composición social que bajo su sombra fue capaz de aglutinar a fuerzas muy disímolas en el exitoso intento de frenar al escritor Mario Vargas Llosa, estrella fulgurante de las derechas agrupadas en el Frente Democrático, *Fredemo*.

Los tres últimos procesos electorales al amparo de la Constitución de 1979, concluido el docenio militar (1968-1980), nos han presentado un complejo panorama político que se entrecruza con una crisis crónica y general y una guerra interna en desarrollo. En este escenario político, han sobresalido nuevos liderazgos carismáticos o simbólicos, más allá de los tradicionales alineamientos partidarios o frentistas.

El ascenso vertiginoso de figuras desconocidas en la escena política del país, como Alan García y Alberto Fujimori, no sólo alude al desgaste de los liderazgos tradicionales, sino a la aparición de un nuevo perfil de las jefaturas políticas, así como al desarrollo de nuevas formas de consenso y legitimidad que rebasan los marcos institucionalizados y ritualizados del sistema político. Las explícitas apelaciones a las filiaciones de carácter religioso, étnico y nacional durante los procesos de definición política han sido tan exitosas como fugaces. Sucede que el Perú hirviendo de estos años, persiste todavía en el intrincado camino de forjar su nacionalidad y tentar intuitiva y desesperadamente por los diversos

esbozos de proyectos nacionales. Los largos debates políticos acerca de lo que en la década pasada se denominó "Perú 2000", han carecido de capacidad de convocatoria programática y traducción popular, a pesar de ostentar consolidadas estructuras orgánicas a escala nacional.

A lo largo de este artículo trataremos de hacer un breve recuento y caracterización del sistema político electoral, así como del proceso concreto que nos tocó espiar. Igualmente, intentaremos una aproximación a la explicación, por una parte, del denominado "fenómeno Fujimori" en tanto proyecto emergente y viable en las expectativas populares, y, por otra, de las limitantes socio-culturales de la nueva derecha peruana, como proyecto de poder. Finalmente, precisaremos algunas ideas e interrogantes sobre el curso futuro del nuevo gobierno.

Tiendas y trastiendas del proceso electoral

El régimen electoral vigente en el Perú, no es de los que podríamos denominar, con exactitud, democrático. Corresponde a la variante DUSO (directo, universal, secreto y *obligatorio*), recomendada por la Liga de las Naciones durante el período de entreguerras, para aquellos países que acababan de salir del paraguas colonial y carecían de "experiencia y conciencia democrática". La obligatoriedad del voto se justificaba en un país como el Perú, porque la población indígena en su mayoría analfabeta, quedaba excluida del derecho a sufragio y porque, además, pesaba sobre el conjunto del sistema político una significativa tradición de golpes y dictaduras militares.

Se pensaba que presionando sobre la población votante, se reforzarían los cimientos de una democracia por venir. Aun cuando la reforma constitucional de 1979 y la apertura de una nueva fase electoral después de doce años de gobiernos militares, amplia-



ron el universo de los ciudadanos con derecho a voto, se consideró oportuno y necesario mantener la obligatoriedad del sufragio con la finalidad democrática de educar a las masas sin experiencia electoral, por la vía del hecho. Una vez iniciado el proceso de guerra interna, el abstencionismo —ilegal por definición y objeto de sanción pública y pecuniaria—, devino en objetivo militar contrainsurgente.

En estas elecciones generales, bajo el contexto de una nueva fase de desarrollo de la guerra interna, contaron mucho los mecanismos compulsivos, directos e indirectos del sufragio. En el fondo se trataba de la propia legitimidad del sistema político. A pesar de la tradición coercitiva del empadronamiento y del sufragio electoral, se estimaba que poco más de dos millones de potenciales electores, en su gran mayoría campesinos, habían quedado fuera del registro electoral. Las hoy cada vez más frecuentes redadas masivas en las principales ciudades, reportan un significativo número de indocumentados, es decir, sin libreta electoral o, lo que es lo mismo, sin cédula de identidad, razón por la cual los migrantes rurales, son considerados, sin más, "sospechosos de terrorismo". Hostigados por las fuerzas del orden, tanto en el campo como en la ciudad, en cada coyuntura electoral se convierten en virtual fuerza de impugnación, a pesar suyo.

Hay consenso que la batalla por las elecciones es parte importante de la lucha por la defensa del orden social y la reafirmación de sus instancias legales de poder. Más aún, de que la lucha en favor de las elecciones es en cierto sentido, una importante bandera contrainsurgente capitalizada por las FFAA. Implementar su realización, suponía un cronograma de acciones y medidas antisubversivas de corte antipopular.

Al referirse al proceso electoral en su conjunto —incluyendo las elecciones municipales en noviembre y las gubernamentales del próximo abril—, el comandante general del ejército peruano Artemio Palomino manifestó: "estamos en una permanente guerra contra la subversión y no dejaremos ese accionar hasta derrotarla".¹ El despliegue de casi trescientos mil efectivos militares y policiales para resguardar las 51 855 casillas electorales a nivel nacional, puso en evidencia la importancia estratégico-militar asignada en los comicios presidenciales de 1990. No obstante, las FFAA tuvieron que renunciar a ciertos espacios de control. Así por ejemplo, en la provincia de Andahuaylas, ubicada en la principal región insurgente del sur andino, de 500 comunidades campesinas sólo 10 contaron con casillas electorales.

Un conocedor de los Conflictos de Baja Intensidad (CBI) adjunto a la embajada norteamericana en la ciudad de Lima, comentaba con agudeza en vísperas de las elecciones municipales del pasado noviembre, lo que parecía ser consenso en las fuerzas armadas y en los partidos políticos contendientes: que Sendero Luminoso no sería capaz de subvertir ninguno de los dos procesos electorales. El analista pensaba, más bien, que la estrategia senderista era "reducir el número de candidatos y votantes para que la validez de las elecciones sea puesta en duda, y suscitar la posibilidad de que los militares retornen al poder", polarizando aún más a la sociedad peruana en beneficio de su proyecto de poder.² Los resultados de las rondas electorales del 8 de abril y del 10 de junio, han significado un duro revés coyuntural para Sendero Luminoso, pero también para el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Complejo proceso electoral en donde se cruzó una abigarrada gama de contradicciones provenientes del antagonismo entre las derechas aglutinadas en el Fredemo y las diversas opciones de centro y de izquierda. A ello se sumó, por una parte, la polaridad existente entre los partidos e instituciones que defienden el ya precario y vulnerable sistema electoral y las fuerzas que han optado por la lucha armada y, por otra, las disputas habidas entre los candidatos en el seno de cada lista para conquistar los votos preferenciales que les otorgaría el sistema durante la primera ronda electoral. Los comicios de junio obligaron a un realineamiento de fuerzas políticas que favoreció largamente a la candidatura de Alberto Fujimori. Los votos del APRA y de las izquierdas le sumaron un tercio a su caudal de sufragios, colocando de manera más visible el nivel de polaridad política lograda por el proyecto fredemista frente a una intuitiva pero contundente respuesta popular.

Mientras que el Instituto Nacional de Estadística en este país de 22 millones de habitantes, cifró en más de 12 millones la población mayor de 18 años obligada a participar en los comicios electorales, el Jurado Nacional de Elecciones registró a 9923062 empadronados, de los cuales estimaba que votarían alrededor de 7 millones. La formal exclusión del 21 por ciento de la población en edad de votar no afectó la "legitimidad del proceso electoral" ya que, para el Jurado Nacional de Elecciones, simple y llanamente no existían los que quedaron fueran de registro. En cambio, sí le preocupaba el porcentaje estimado de abstencionismo. Los resultados de la primera y segunda ronda electoral, han resultado más exitosos de lo que los organismos oficiales y los propios partidos políticos estimaban: de los 7 millo-

¹ Associated France Press, Lima, 27 de octubre de 1988.

² Joseph B. Treaster, en *The New York Times*, 25 de octubre de 1989.

nes setecientos mil sufragios de los primeros comicios, se llegó a la cifra de ocho millones de votantes en el curso de la segunda vuelta.

La lucha más difícil fue la que libraron las fuerzas contendientes por abatir el porcentaje de abstencionismo, así como el atribuible a los votos blancos y viciados. Fue la gran batalla institucional contra las opciones deslegitimadoras del MRTA (voto en blanco) y el de (boicót).

Durante los recientes comicios municipales el sistema había logrado pasar con relativo éxito la temible valla de las campañas insurgentes, aunque el Jurado Nacional de Elecciones no había querido dar cifras sobre el abstencionismo y los votos nulos y en blanco.³ No obstante lo anterior, se filtró información a nivel regional acerca de reverses significativos. Así por ejemplo, en Huamanga, capital del convulsionado Ayacucho, a pesar del despliegue de fuerzas militares y policiales, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que reconocer que el abstencionismo ascendió al 72.80 por ciento. Del esmirriado total de los votos válidos, las dos terceras partes correspondieron a votos blancos y viciados, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones optó por declarar nulo el proceso.⁴

Si el porcentaje efectivo de electores que respaldaban a algún candidato presidencial en los comicios generales de 1985 fue del orden del 77.28 por ciento, y estimamos la tasa decreciente del 13.22 por ciento de los comicios municipales de noviembre, podremos colegir que el proyecto legitimador del sistema político electoral vigente se ha revitalizado coyunturalmente al ser respaldado por una población de electores cercana al 64 por ciento.⁵

Definitivamente la correlación de fuerzas debe ser medida más allá de estos ejercicios cuantificados del sufragio y del abstencionismo.

La voluntad política de las fuerzas electorales así como de las instituciones y fuerzas preelectorales (corporaciones empresariales, iglesias, fuerzas armadas y centrales sindicales), indican que el sistema electoral, a pesar de sus debilidades crecientes, cuenta todavía con capacidad de maniobra suficiente para legitimar al relevo de mandos políticos en casi todo el territorio nacional, principalmente en las ciudades. Sin lugar a dudas, la segunda ronda electoral fortaleció esta orientación política. Los temores de las FFAA y del propio Vargas Llosa acerca del potencial desgaste del sistema electoral en el curso de una segunda ronda, fueron superados por el "fenómeno Fujimori".

El debate en torno al *quorum* exigido en la pri-

mera ronda electoral para aspirar al bando presidencial, se situaba sobre fuerzas políticas más visibles al principio de la campaña electoral: el Fredemo por un lado, y el Apra y las izquierdas, por el otro.

Con motivo de las pasadas elecciones generales (1985), Javier Alva Orlandini, el alicaído candidato del partido oficial, Acción Popular, introdujo una cuña procesal al incorporar entre los votos válidos a los tradicionalmente considerados nulos (blancos y viciados). Pensaba así frenar la arrolladora campaña aprista que llevó a la presidencia de la república, al hoy desgastado Alan García, al fijar la valla de un 51 por ciento inalcanzable en la primera ronda. Acción Popular no contaba que su candidato sólo alcanzaría un exiguo 7 por ciento dejándolo fuera de opción para la segunda y al parecer inevitable ronda electoral. Tampoco el partido oficial contaba con el hecho de que Alfonso Barrantes Lingán, el candidato de fuerza de la Izquierda Unida, renunciaría a participar en una segunda ronda, en favor del en ese entonces flamante candidato aprista.

El gobierno de Alan García no se preocupó por derogar la ley 23 903, antes al contrario pensó utilizarla para frenar las aspiraciones presidenciales del candidato del Fredemo, Mario Vargas Llosa. Con la antigua ley de 1980, Mario Vargas Llosa necesitaría aproximadamente 3 millones y medio de votos a su favor; con la denominada "ley Alva", aún vigente, requería de aproximadamente unos 4 millones doscientos cincuenta mil sufragios a su favor, cifra difícil de alcanzar si nos atenemos a los resultados tendenciales arrojados por las encuestas de opinión, en los umbrales de los comicios de abril de 1990. Por si fuera poco, el Partido Acción Popular, demiurgo de tan maquiavélica ley, formaba parte sustantiva de las fuerzas aglutinadas en torno al Fredemo.⁶

Por su lado, el ya abatido Partido Aprista, aspiraba a la concertación con las fuerzas de *Izquierda Socialista* y de *Izquierda Unida* —lideradas, respectivamente, por Alfonso Barrantes y Henry Pease—, para mantenerse en el poder. Contra todo pronóstico, la segunda ronda electoral permitió oxigenar la emergente candidatura del ingeniero Alberto Fujimori, de Cambio 90.

Complicado proceso electoral en donde contaron sin lugar a dudas los movimientos subterráneos y las zancadillas políticas, más allá de la guerra de los spots televisivos puesta en boga en un país en que la técnica de las grandes concentraciones sociales, tuvo que pasar a segundo plano. Los crecientes riesgos de un atentado terrorista, constituyeron un poderoso factor disuasivo, pero la campaña electoral no se vio disminuida por los espectaculares al-

³ *Caretas*, núm. 1091 Lima 15 de enero de 1990.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Rafael Roncagliolo, "Elecciones en Lima: cifras testarudas", en *Qué Hacer*, núm. 62 Lima, diciembre de 1989 a enero de 1990, pp. 12-21.

⁶ *Caretas* núm. 1092, Lima, 22 de enero de 1990.

cances propagandísticos que otorgó la pantalla chica, sobre todo cuando se cuenta con recursos financieros como fue el caso del Fredemo.

El vertiginoso ascenso de Cambio 90 y su líder Fujimori, se vio beneficiado tanto por la guerra deslegitimadora de los spots televisivos que terminó por minar la credibilidad de los líderes del Fredemo, del Apra y de las izquierdas, como por las redes orgánicas con las que montó su campaña electoral: las iglesias evangélicas y los organismos gremiales de los "informales", cuyas principales cabezas aparecieron figurando en su equipo parlamentario y gubernamental. Uno y otro factor, hicieron más permeable la ambigüedad del discurso político de Fujimori en el seno de las masas populares.

La lucha para lograr la hegemonía en el Jurado Nacional de Elecciones, corrió paralela con la disputa más subterránea de ganar posiciones claves en el seno de las fuerzas armadas, garantes y custodias del proceso electoral. En el Jurado Nacional de Elecciones, por obvias razones, el Partido Aprista las tuvo casi todas consigo. Los ruidosos reclamos de la oposición fredemista en torno a la inconstitucionalidad de la "ley Alva", el uso de sellos no indelebles, la recomposición arbitraria de las opciones electorales en las cédulas de sufragio y los sospechosos sistemas de conteo prolongado en las provincias, son harto conocidos. No bastaba, pues, con tener voluntad y convicción de triunfo en la campaña electoral. El realineamiento político del APRA en favor de Fujimori durante la segunda ronda electoral, le otorgó a éste, un respaldo decisivo en su disputa con Mario Vargas Llosa por la presidencia de la república.

Hubo que librar la batalla en el propio seno de las fuerzas armadas. No fue casual que durante la primera ronda electoral, diversas listas incluyesen como candidatos a algunos militares de alto rango, especialistas en contrainsurgencia. El general Cisneros Vízquerza integró la planilla de *Somos Libres*, agrupación política que lideró el banquero Pardo Meneses. El Partido Aprista incluyó al almirante Soria, exministro del interior del actual régimen, al teniente general de la fuerza aérea Hardy Montoya y al general del ejército, Parra.

Por su lado, el Fredemo incorporó en su lista de candidatos al teniente general de la fuerza aérea, Luis Arias Graziani, a los generales del ejército, Sinesio Jarama y Antúnez de Mayolo, así como el general de policía, Olivares. Además de ello, los fredemistas contaban con una Comisión de Apoyo a la Lucha Antisubversiva en la que figuraban, entre otros, el general Abram y el Almirante Sánchez.⁷

En esta perspectiva, Cambio 90 aparecía ante los ojos de algunos sectores populares como la opción

política menos comprometida con las banderas guerrilleras de las FFAA y de la DEA. Tanto la composición de la élite dirigente de Cambio 90, como el mensaje de pacificación de Alberto Fujimori, así parecían refrendarlo. La segunda ronda electoral y particularmente esta fase de transición hacia el relevo gubernamental, le han demandado a Cambio 90, una difícil etapa de negociaciones con diversos sectores de las FFAA. Las presiones de las FFAA sobre la viabilidad de un diálogo con las fuerzas guerrilleras para concertar la pacificación del país, incidieron negativamente en ciertas declaraciones de Fujimori al declarar que no dialogaría con SL y el MRTA hasta que no depusieran las armas. La oferta de mediación de la Iglesia Católica para concertar un diálogo acerca de la paz con las organizaciones alzadas en armas, le han permitido a Fujimori contrabalancear las presiones castrenses y referirse a la posibilidad de un diálogo futuro.

Hemos de señalar, finalmente, que el funcionamiento del sistema político-electoral ha descansado en la puesta en marcha de la maquinaria coercitiva estatal a escala nacional, combinando operativos de guerra psicológica con los de vigilancia y protección de los candidatos y del propio proceso electoral, así como la realización de importantes oleadas de rastillaje anti-terrorista, principalmente en las zonas marginales y céntricas de las más importantes ciudades del país. En el campo, el empleo de helicópteros artillados y carros orugas le han dado un nuevo sesgo al curso actual de la guerra interna, forzando a las guerrillas a modificar de alguna manera los tiempos y modalidades de desplazamiento y ataque con el fin de evitar estas ofensivas por aire que técnicamente todavía no están en capacidad de repeler. Asimismo, las tareas de inteligencia militar se han redoblado, asumiendo un carácter permanente de alerta en la actual coyuntura. La magnificación de la supuesta caída del cuartel general de Sendero Luminoso y la presunta realización de gloriosas y exitosas batallas de las fuerzas contrainsurgentes, se han visto opacadas por los hechos más recientes, entre los que destaca la fuga de medio centenar de guerrilleros del MRTA, confinados en una cárcel de alta seguridad en la ciudad de Lima.

Así las cosas, la cuestión de la defensa de los derechos humanos ha emergido como el fantasma más real de la sociedad civil, prohijado al amparo del maquillado sistema democrático que garantiza el relevo natural de los mandos políticos de este país andino. El despliegue represivo desatado con motivo de la fuga de los presos del penal de alta seguridad de Canto Grande, en vísperas de la asunción del mando del ingeniero Fujimori, pretende no sólo ser una respuesta a la afrenta guerrillera, sino además convertirse en un factor de mayor presión castrense sobre el nuevo equipo gubernamental, así como en una palanca de intimidación que atenúe

⁷ Oiga, núm. 467, Lima, 29 de enero de 1990.

sus ímpetus frente a un eventual desborde popular ante las próximas medidas de emergencia económica.

La nueva derecha y los informales de Cambio 90

Las posiciones neoliberales y desnacionalizadoras de la economía asumidas por los partidos tradicionales de las derechas —Acción Popular y Popular Cristiano— durante la segunda administración de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), terminaron por minar los afanes del Movimiento Libertad liderado por Mario Vargas Llosa por subordinar a su plataforma política a los numerosos contingentes de "empresarios informales" e incluso a ciertos empresarios tradicionales, afectados rudamente en sus intereses por la liberalización del mercado interno.

La consolidación orgánica de un frente de los grandes empresarios y de los "informales" no podría basarse únicamente en los pequeños espacios de poder en el seno de un frente amplio de las derechas, a la sombra de la figura carismática del escritor Mario Vargas Llosa. Había que optar por montar una bisagra que atenuase los abismos y diferencias existentes entre la gran burguesía peruana y los "informales". En esta dirección, anticipándose a la constitución del Fredemo, se constituyó la Unión Formal-Informal (UFI) el 12 de febrero de 1988. La iniciativa partió de Hernando de Soto presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) con la anuencia y cooperación del más importante agrupamiento empresarial intersectorial, la CONFIEP.

Varios hechos evidenciaron las contradicciones políticas entre los "informales" y la CONFIEP: la precoz desactivación de la UFI por parte de la principal corporación-patronal del Perú, la definición programática del Fredemo del 14 de abril de 1989 y el ulterior distanciamiento de este proyecto político de Hernando de Soto, que se convertiría en breve lapso en el principal asesor de Alberto Fujimori.

Las contradicciones interburguesas expresadas a través de la tensa y brumosa relación entre los directivos de la CONFIEP y los líderes de los pequeños empresarios o "informales", no sólo expresaban diferentes intereses sociales, sino también estilos encontrados acerca del carácter de la legalidad de la actividad empresarial y económica. Además, los miembros de la CONFIEP compartían una explícita taxonomía racista que legitimaba la verticalidad de las distancias sociales al sostener que "el sector informal es el indígena el más bronceado de la población".⁸

El espectro electoral fredemista se complicó aún más con la intervención de Vargas Llosa en torno a

las aristas económicas y sociales de su plan de gobierno, durante la tradicional reunión anual de los empresarios peruanos: CADE (diciembre de 1989). Las voces disidentes de los sectores empresariales frente al plan de shock económico se dejaron oír con claridad y preocupación creciente.

Las promesas de reactivación económica luego de una fase recesiva de dos o tres años de probable gobierno fredemista, rebasaron las expectativas de rentabilidad y seguridad en el corto plazo de la mayoría empresarial. Pero la repercusión electoral del agresivo neoliberalismo económico de Vargas Llosa anunciado en dicho evento empresarial, aunado a sus proclamas militaristas de movilizar a toda la población civil para derrotar a la subversión, terminaron por incidir en su propia imagen electoral. No fue casualidad que, durante la siguiente semana, el índice de preferencia entre los potenciales sufragantes capitalinos descendió del 52 al 43.5 por ciento.⁹

Hacia los meses de febrero-marzo de 1990, en la cresta de la campaña electoral fredemista, se libró la polémica televisiva entre Gastón Benza Pflucker, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) y Manuel Moreyra de *Solidaridad y Democracia* (SODE), una pequeña agrupación político-empresarial adherida al Fredemo. El eje de la controversia giró en torno a la eliminación del CERTEX, cuestión defendida por Moreyra y que estaba inserta en la propuesta de gobierno de Mario Vargas Llosa, de potenciar la capacidad competitiva de los empresarios exportadores sin el paraguas proteccionista de los aranceles y subsidios estatales. La diferenciación de posiciones entre los exportadores había llevado a su facción neoliberal a la escisión orgánica, al conformar la denominada Sociedad Nacional de Exportadores (SNE).

La polémica entre Benza y Moreyra se repitió con otros protagonistas y se sobredimensionó con sus ecos periodísticos y gremiales. En el fondo reactualizó no sólo un viejo debate, sino la evaluación de la propia gestión de Moreyra-Silva Ruete y de su continuador Ulloa en la cartera de economía y finanzas bajo el segundo gobierno Accio-pepecista de Belaúnde Terry (1980-1985), el cual terminó por golpear rudamente a ciertos grupos industriales y a sectores amplios del pueblo, desencantando a los empresarios de un proyecto político que creyeron suyo. A partir de allí, los empresarios han jugado un rol político más activo y protagónico en el Perú, no sólo haciendo explícita su capacidad de cohesión de clase en su lucha contra el gobierno de Alan García con motivo de la intervención estatal en la banca privada, sino también dejando manifiesta su

⁸ Expansión núm. 473, año XIX, volumen XIX, 2 de Septiembre de 1987.

⁹ Manuel Córdova, "El proyecto neoliberal: la oportunidad perdida", en *Qué hacer*, núm. 64, Lima, mayo-junio de 1990, pp. 18-21.

pluralidad contradictoria de intereses económicos y sus faccionalismos políticos e ideológicos.

La derrota electoral del Fredemo debe partir de la revisión de algunas ideas comunes y superficiales que consideraban a éste como un agrupamiento político de las derechas, monolítico y arrollador y que aducen que sus reveses habrían sido resultado de supuestos errores técnicos y de conducción política de la campaña electoral.

El despliegue publicitario del Fredemo durante la segunda ronda electoral —además de hacer gala como en la primera vuelta de su bombardeo millonario de lemas, figuras y ataques a sus principales oponentes—, corrió paralelo al desborde de las posiciones más reaccionarias de su élite dirigente, pero también de sus adherentes de base.

La mentalidad oligárquica de los fredemistas exhibió como su signo más visible su desembozado racismo. El aguerrido lema de “¡Vargas Llosa presidente, Fujimori su sirviente!” o de “¡Mario presidente, el chinito su sirviente!”, no hizo más que refrendar la visión fantasmagórica que la élite fredemista tiene de los hijos de ese otro Perú, tan poco hispano y tan racial y étnicamente diverso y heterodoxo. La intencionalidad de clase de la más espontánea y popular arenga fredemista nos ha dicho mucho más acerca de su real concepción del poder que los siete velos posmodernistas acerca del capitalismo, la democracia y el Estado, que intentó novelarnos su candidato presidencial.

Las banderas “democráticas” del Fredemo justificaron no sólo los excesos de violencia racial que reportaron las agencias de noticias, sino también su potencial autoritarismo político. Conocidos los resultados de la segunda ronda electoral, cientos de adherentes del Fredemo se congregaron espontáneamente frente a la residencia del frustrado candidato Mario Vargas Llosa a los gritos de “Golpe militar!, ¡Golpe!, ¡Mario, Presidente!”. Y aunque el autor de *la Guerra del fin del Mundo* además de visitar a su oponente en señal de reconocimiento de su derrota, desestimó explícitamente tan incómodas manifestaciones de apoyo, dejó en el ambiente político más próximo un hábito de inconformidad y desazón, tendencialmente proclive a desempañar una oposición intransigente y desestabilizadora. Ni Mario Vargas Llosa, ni sus asesores y adherentes podían entender cómo a pesar del exitoso debate que libró con el oponente Fujimori, al que caricaturizó no por casualidad de “samurai”, los sufragantes le torcieran la espalda.

Un sondeo de opinión pública acerca del debate electoral Vargas Llosa *versus* Fujimori, al cierre de campaña durante la segunda ronda, reveló una cifra récord de telespectadores, pero sobre todo una desigual percepción etnoclasista del evento y sus protagonistas. En los barrios y colonias populares de la capital, se ratificó a Fujimori como el triunfador,

no así en los barrios residenciales y de capas medias. Las razones, poses y habilidades polémicas del *escribidor*, pesaron menos que la identificación y polarización de identidades y símbolos de clase y etnias, personalizadas en las figuras del “señor” Vargas Llosa y del “chinito” Fujimori.

Durante las semanas previas al debate y cierre de campaña se había desarrollado un proceso subterráneo de reacomodo de fuerzas al interior del Fredemo que, si bien no fracturó las adhesiones de los gremios y facciones empresariales, dejó abiertas muchas fisuras. El plan económico de Vargas Llosa quedó colocado en una fase de potencial renegociación a pesar de la terca y tenaz voluntad neoliberal de este candidato presidencial. Los matices discursivos del líder fredemista durante la campaña para la segunda ronda electoral, apuntaron en cierta medida a cohesionar sus propias fuerzas internas, así como a proyectarse con mayores ímpetus hacia el campo popular. Pero para las posiciones divergentes en el seno del Fredemo, el compromiso de voto con Vargas Llosa era tan ineludible como su necesidad de renegociar en el corto plazo los alcances económicos de su proyecto de gobierno.

Del lado popular, el mensaje matizado de Vargas Llosa sobre las virtudes del capitalismo popular y la liberalización del mercado, distaban de ser convincentes. La apología neoliberal del mercado interno transnacionalizado como palanca de la modernidad, no hacía otra cosa que revivir los malos tiempos del segundo experimento belaundista, así como potenciar —a pesar de la intención fredemista—, el discurso sobre la otra modernidad que los ofrecía de manera más persuasiva el líder de Cambio 90: Tecnología y Trabajo.

El creciente realineamiento de los informales fue facilitado no sólo por el deslinde programático sustentado por Vargas Llosa durante la primera ronda electoral, sino también por una no menos clara definición programática de la Federación Nacional de Asociaciones de la Pequeña y Mediana Industria (FENAPI) la cual se sabía representada en Cambio 90. Además de Máximo San Román, líder de este organismo y candidato de una senaduría y a la primera vicepresidencia de la república, aparecen un número significativo de pequeños industriales y comerciantes como aspirantes a diversas curules parlamentarias.

El encuentro entre estos sectores organizados del denominado sector informal urbano, ávidos de capitalización, y los alineamientos de las iglesias evangélicas, recuerdan más de un aserto weberiano sobre la ética protestante del capitalismo. La sedimentación ideológica aportada por las sectas protestantes para acelerar el proceso de diferenciación social del campesinado en América Latina, tiene también a presentarse como fuerza dinamizadora de los pequeños empresarios y comerciantes urba-

nos en sus diferentes rubros o giros de actividad económica, así como en razón legitimadora de los procesos de diferenciación social que les acompañan.

A nivel del imaginario popular, la terna simbólica del liderazgo de *Cambio 90* configuró la personalización sacralizada de su lema. El ingeniero Alberto Fujimori, permitía asociar las difusas pero atrayentes imágenes de Tecnología como base de la modernidad. Sus peculiares raíces orientales y su perfil de profesionalización —un ingeniero agrónomo experto en política alimentaria que había llegado a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores de la Universidad Peruana y candidato de fuerza a la presidencia de la república—, lo convertían en una especie de “héroe cultural” en amplios sectores de la población. Su ascendencia japonesa aparecía borrada en la traducción popular al ser recategorizado como el “chinito de la suerte”, en este país de abigarrada y contradictoria composición etnoclasista. Quién más peruano que este *chinito* nacido nada menos que el 28 de julio, fecha símbolo de las peruanidades en que se recuerda y reafirma al espíritu de la gesta independentista, y también coincide con la fecha de relevo del mando presidencial.

Los otros dos candidatos a titulares del ejecutivo que le siguen a Fujimori completan esta peculiar terna de gran arrastre popular, Máximo San Román, aspirante a la primera vicepresidencia de la república, es un pequeño industrial provinciano líder prominente de la FONAPI que encarna esa mítica figura del hombre que “emerge de la nada” a partir de *trabajo* tesonero, austeridad y capitalización y al cual Hernando de Soto, autor de *El Otro Sendero* y asesor de *Cambio 90*, ha potenciado con su publicitada tesis de que “todos los peruanos son empresarios en potencia”. Finalmente, el fundamento de la ética protestante, asociada al trabajo y la tecnología, adquiere un nuevo sentido bajo el símbolo de la *Honestidad*, en un país agobiado por la falta de credibilidad política dados los niveles de descomposición moral y corrupción que tienden a acentuarse en los diversos órganos de poder. Su personalización aparece transparente en la figura del pastor Carlos García García, aspirante a la segunda vicepresidencia de la república y principal líder del Consejo Nacional Evangélico.

La auscultación sobre la base social que respaldó la candidatura de Fujimori nos remite a una revisión de la composición social de la población electoral, a partir de su parcial correspondencia con la PEA estimada en 7 millones seiscientos sesenta mil personas en 1990. De ella diversos analistas han calculado que los denominados “informales” urbanos representan entre el 34 y el 49.2 por ciento, esto es, aproximadamente unos 2 millones y medio de personas a nivel nacional; a esta cifra habría que sumar el total de los pequeños propietarios y parceleros del campo, los cuales ascienden a una cifra es-

timada de 1 millón y medio de personas. Es decir, vista en su globalidad, la masa de “informales” representa algo más del 50 por ciento de la PEA total. A nivel de la población electoral, los “informales” se aproximan al 40 por ciento de dicho universo social, hecho demográfico que destaca por su evidente significación política.¹⁰

En general, los alineamientos político-religiosos de los informales deben ser vistos en sus expresiones tendenciales y no como encuadramientos corporativos y matemáticos. Justificaciones como las de Feliciano Barrueto Iparraguirre, pequeño empresario de la industria del calzado, son tendencialmente reiterativas en su ámbito social: “Mi voto ha sido para Fujimori. Me enteré de su candidatura por un familiar que había recibido un volante. Lo elegí porque él y otros que lo acompañan, al igual que yo, son hombres que han luchado y progresado. No escogí al Fredemo, a pesar de que ellos han mencionado su interés por el desarrollo de la empresa privada, debido a que con toda seguridad se ocuparían de la gran empresa y no de las pequeñas como la mía”.¹¹

Hugo Villa Espinoza, un pequeño empresario, dueño de una librería y de un taller tipográfico en el populoso distrito de Comas, declara: “las propuestas de Fujimori son opuestas a las de *shock* que anuncia el Fredemo. Una política de *shock* no puede traer beneficio a los pequeños negocios, ya que reduciría las ventas, pues la gente no podría adquirir productos. Sólo las grandes empresas podrían soportar una política así”.¹²

La potencialidad electoral de los adherentes a las iglesias evangélicas, tampoco es desdeñable. Según las estimaciones, cuentan con 2 millones de feligreses con alta proclividad para sostener un alineamiento político-religioso dados los contornos que en esta dimensión adquirió la oposición Vargas Llosa versus Fujimori. Las apuestas de los pastores evangélicos y del alto clero católico en favor de uno y otro candidato han sido largamente reseñadas por los cables de las diversas agencias de noticias.

Sabido es que el proceso electoral revistió por momentos los contornos simbólicos de una virtual guerra santa que enfrentó a católicos y evangélicos de cara a las candidaturas promovidas por el Fredemo y *Cambio 90*. No obstante, Vargas Llosa se declaró agnóstico y Fujimori, católico. Para comprender mejor este complicado aspecto que cruza de manera tan abierta iglesias, confesiones religiosas y partidos políticos, debemos detenernos un momento en la

¹⁰ Fernando Villarán, “El fenómeno Fujimori o la crisis de las ideas convencionales”, en *Qué Hacer*, núm. 64, Lima, mayo-junio de 1990, p.31.

¹¹ Machacuy Samuel, “El shock, ese viejo conocido”, en *Qué Hacer*, núm. 64, Lima, mayo-junio de 1990, p.45.

¹² *ibid.*, p. 46.

revisión del sistema institucional de este país andino.

La nueva Constitución Política de la República del Perú (1979), a pesar de algunos cambios significativos en beneficio de la laicización del Estado y en favor de la libertad de cultos, reprodujo una vieja vena filoconfesional que les hizo invocar a los constituyentes como primera razón legitimadora "la protección de Dios" y consignar en el artículo 86 del Capítulo I del Título II del Estado y la Nación, que "dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración".¹³ No obstante lo dicho, el mismo artículo deja margen al Estado para que pueda "establecer formas de colaboración con otras confesiones". Y es este margen institucional el que les abre a las otras iglesias la posibilidad de que el Estado peruano se convierta en los hechos en un órgano garante de la libertad de cultos, en pie de igualdad jurídica y política o por lo menos próximo a ella. Este matiz constitucional fue logrado por la innovadora moción del Partido Aprista a iniciativa del primer representante evangélico a una Asamblea constituyente, el teólogo Pedro Arana Quiroz.

El 24 de julio de 1980, el general Francisco Morales Bermúdez, al filo de concluir el llamado docenio militar, expidió el Decreto Ley 23 211, en el que aprobó el "Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú". En este convenio se revisó la vieja práctica gubernamental del Patronato Nacional que le confería al presidente de la República la facultad de proponer a las autoridades eclesiásticas y acordar con el Vaticano las circunscripciones territoriales de los dominios eclesiásticos, así como asumir los costos de operación de los templos católicos a nivel nacional. Ni la nueva constitución ni los ecos del Concilio Vaticano II, podían sostener la subsistencia del viejo patronato que hacía muy visibles las ataduras entre la Iglesia Católica y el poder político. Su revisión era impostergable. Una laicización gradual se cumpliría a favor de los propios fueros y horizontes de la iglesia posconciliar, pero también de la doctrina de la seguridad nacional.

Los veintidós puntos del mencionado convenio, giraron en su mayor parte sobre la recién ganada autonomía de la Iglesia católica para nominar obispos y demarcar jurisdicciones eclesiásticas, aunque subrayase que el Estado "presta su colaboración para la mejor realización de su servicio a la comunidad", que en su artículo 8o. se traducían en "subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia".

El clero católico logró también su ratificación como entidad de derecho público, sin que ello implicase ser incluido como institución estatal. Igualmente logró que su papel hegemónico en la educación privada quedase legitimado.

Del lado del Estado, pero más propiamente de sus fuerzas armadas, quedó evidente el interés de consolidar la relación entre las instituciones castrenses y la tradición católica, cuestión a la que se refieren siete de los veintidós artículos del tratado. Entre ellos se precisa que el vicario de las fuerzas armadas (que funge como obispo castrense) debe ser peruano de nacimiento y contar con el visto bueno del presidente de la República, es decir, del comandante supremo de las fuerzas armadas. Otros artículos aluden a las características de nominación, subordinación y función de los capellanes militares. El tener doblemente corporativo de las fuerzas armadas, como entidad militar y religiosa, tiene un peso fundamental en el curso de la guerra interna, hecho que no ha sido debidamente atendido por nuestros analistas. Así las cosas, la defensa de la "civilización occidental y cristiana" adquiere para las fuerzas armadas un sentido más cabal y terreno. El ametrallamiento de que fueron objeto los asistentes a un oficio religioso en una iglesia protestante en Ayacucho, por parte de la infantería de marina debe ser recordado. Marca más de una distancia con el proceso contrainsurgente en Guatemala y otros países latinoamericanos.

El hecho de que el actual presidente electo Alberto Fujimori tuviese como acompañante de fórmula al pastor García, fue magnificado al saberse que 47 pastores evangélicos de un total de 160 candidatos a curules parlamentarias, estaban presentes en el equipo de Cambio 90. Este hecho marcó distancias y rebasó los límites de tolerancia de la cúpula eclesiástica de los católicos peruanos. La polarización religiosa revistió un nivel de confrontación que hizo recordar curiosamente la primera batalla de los evangélicos contra la intolerancia de la Iglesia católica, precisamente hace cien años.

Durante el mes de julio de 1890, a pocos meses de haber llegado la primera misión metodista al Perú, la Iglesia católica demandó de las autoridades políticas, la prohibición del culto evangélico amparándose en el artículo IV de la constitución vigente en ese entonces, que formalmente sólo le reconocía a la Iglesia católica la facultad de ejercer culto público. A raíz de esta denuncia fue detenido el pastor Francisco Penzotti, siendo confinado en la cárcel subterránea destinada a los condenados a muerte en el antiguo cuartel colonial del Real Felipe en el puerto de El Callao.

En ese entonces, el caso Penzotti, agitó a la opinión pública nacional e internacional. Liberales, masones y librepensadores, al lado de los primeros grupos de protestantes peruanos, asumieron la de-

¹³ Nueva Constitución Política del Perú, Editora Lima S.A., Lima, 1979, pp. 19-20.

fensa del pastor Penzotti. La intervención diplomática de los EEUU forzó un fallo judicial a favor del inculpado. Esta fue la primera derrota del conservadurismo católico frente a las iglesias evangélicas. A partir de 1890, la expansión de las misiones protestantes siguió un doble curso expansivo: el "circuito minero" privilegiado de manera creciente por los capitales norteamericanos en los andes peruanos, y la red urbano-costeña que acompañaba el proceso de articulación vial conforme avanzaba la construcción de la carretera panamericana.¹⁴

La segunda derrota del conservadurismo católico se libró el año de 1923, cuando el monseñor Lison, obispo de Lima, lanzó la campaña para consagrar el Perú a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con la velada intención de respaldar la reelección de Augusto B. Leguía en la presidencia de la República. En ese entonces, la batalla por la libertad de cultos aproximó a la Iglesia metodista y a las otras catorce iglesias evangélicas, a los sectores políticos más avanzados de su tiempo. Anarquistas, socialistas y destacados líderes de la reforma universitaria como Víctor Raúl Haya de la Torre —más tarde fundador del Apra—, levantaron exitosamente las banderas liberales en favor de la libertad de cultos.

La tercera cruzada del conservadurismo católico ha sido la librada en el curso del actual proceso electoral. El arzobispo Vargas Alzamora, pariente cercano del candidato Mario Vargas Llosa, movilizó a la feligresía popular de Señor de los Milagros, en una procesión inusual, para enfrentar los desmedidos afanes de las iglesias protestantes de socavar la hegemonía de la Iglesia católica, a través de la pujante plataforma electoral de Cambio 90. El hecho fue aprovechado para orientar subterráneamente el potencial y mayoritario voto católico en favor de su primo fredemista. El encuadramiento religioso que esperaba recibir el Fredemo no fue tan masivo como se pensaba, pero cumplió su papel. Los límites del encuadramiento católico promovido por el Arzobispo Vargas Alzamora partieron de su propia incapacidad para convencer a la población electoral través de una bandera precariamente faccional, al sostener una supuesta externalidad de las iglesias evangélicas que pretenderían "romper la unidad de la peruanidad: su fe católica".¹⁵

Balance de los resultados electorales y perspectivas futuras

Los sondeos acerca de la intención de voto que las diversas compañías encuestadoras realizaron duran-

te la semana previa a los comicios presidenciales de junio del 90, indicaban como variable significativa al grupo de indecisos. Sin embargo, los alineamientos electorales en la perspectiva de los comicios de abril, indicaban ya para el mes de enero de 1990, la existencia de un importante sector de potenciales sufragantes que oscilaba entre el 25 y 26.9 por ciento y cuya composición social en un 80 por ciento se situaba entre los estratos bajo inferior y bajo superior. Esta franja de la población electoral indecisa, indicaba también que en anteriores comicios había votado masivamente en favor sea del APRA o de la Izquierda Unida.¹⁶

El curso de la polarización política situó los dos ejes de concentración electoral, el Fredemo, que agotó sus posibilidades de expansión y alineamiento político en el momento más crucial de la campaña, enero-febrero de 1990. El amplio espectro popular tendió a desestimar los alcances de una izquierda dividida y de un Partido Aprista desgastado por los avatares de la bancarrota gubernamental de Alan García, al mismo tiempo que se supo y sintió abiertamente exluída y agredida por el proyecto fredemista, más allá de los cantos de sirena del novelista.

En este sentido, el arqueólogo Guillermo Lumbreras, agudamente ha señalado que: "la soberbia, la prepotencia, la intolerancia, el paternalismo de que hicieron gala a lo largo de la campaña no son, pues, errores del Fredemo y de Vargas Llosa. Forman parte de su conducta social".¹⁷

En este interregno, la opción de Cambio 90, comenzó a ganar espacio sobre ese tercio electoral que tendía a oscilar entre el voto impugnador del sistema (blanco o viciado) o el abstencionismo. La incapacidad política del MRTA y de SL para capitalizar la orientación de este sector de amplia base popular, abrevó también en favor de Cambio 90 y del ingeniero Alberto Fujimori. El haber logrado este último el 56.3 por ciento de los votos válidos contra el 33.9 por ciento del candidato fredemista, son hartos elocuentes.

Las proyecciones sobre los primeros resultados electorales del 10 de junio nos revelan que la región surandina, la más golpeada por la guerra interna y la más próxima a las izquierdas, se volcó a favor de la candidatura de Alberto Fujimori. Los votos de adhesión al líder de Cambio 90, fluctuaron entre el 72 y el 58.6 por ciento, mientras que el Fredemo se colocó muy por debajo con un flujo de votos en pro de Vargas Llosa que osciló entre del 36.9 y el 17.2 por ciento.

En la región amazónica —asolada por el narcotráfico y la DEA, aunque también por las querellas y pugnas interguerrilleras del MRTA y SL—, el Fredemo

¹⁴ Rosa del Carmen Jofre, "La misión metodista y la educación en el Perú: 1889-1930", en *América Indígena*, núm. 3, año XLI, vol. XLI, México, julio-septiembre de 1981, pp. 501-515

¹⁵ *Caretas*, núm. 1110, Lima, 28 de mayo de 1990.

¹⁶ Manuel Córdova, *op.cit.*, p. 19.

¹⁷ *Prensa Latina*, Lima, 19 de junio de 1990.

mo acertó distancias en los porcentajes obtenidos. Mientras que en el norte del país, tradicional bastión aprista, el candidato de Cambio 90 se impuso con tanta claridad como en la región surandina, salvo los departamentos de Piura y Tumbes.

Y en lo que respecta a la capital del país que concentra un tercio de electorado nacional, los distritos obreros y populares (Ate, Comas, Carabaylo, La Victoria, Independencia, Rímac, San Martín de Porres, Surquillo, San Juan de Miraflores, El Agustino, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador), todos ellos de alta concentración demográfica, orientaron tendencialmente su voto hacia la candidatura de Fujimori, fluctuando sus promedios entre el 66.4 y el 45 por ciento. En los distritos residenciales y de las tradicionales capas medias limeñas (Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Borja, La Molina, Barranca y Chorrillos), la votación a favor de Vargas Llosa y el Fredemo fue abrumadora, moviéndose entre el 77.5 y el 54.6 por ciento. Es de hacerse notar que los distritos de Lince y Breña y Jesús María, de fuerte presencia de inmigrantes provincianos clasemedios, respaldó también de manera relevante la candidatura del autor de *La ciudad y los perros*, oscilando sus adhesiones entre el 51.2 y el 74.5 por ciento.¹⁸

Sin lugar a dudas, la geografía electoral del Perú refleja la nitidez de los antagonismos etnoclasistas que subyacen a estos dos alineamientos que se estructuraron en torno a las candidaturas de Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. El perfil del electorado se hizo más transparente en su polaridad al abatirse sensiblemente los votos blancos y viciados, incluso en zonas tan convulsas como el propio Ayacucho.

El presente que recibirá Fujimori por parte del equipo gubernamental saliente, deja mucho que desear. El Perú se encuentra en virtual bancarrota económica, exhibiendo números rojos en sus principales sectores productivos. A ello se suman sus mermadas reservas de divisas por debajo de los 300 millones de dólares, la declaración de inelegibilidad en materia crediticia por el FMI y el Banco Mundial, un juicio por 2 mil millones de dólares sobre pagos vencidos iniciado por sus acreedores en Nueva York, sin aludir a otros próximos vencimientos de una deuda externa que septuplica el ingreso de divisas por concepto de su balanza de comercio exterior.

Los inusuales afanes de Fujimori por establecer los primeros contactos internacionales para conseguir préstamos frescos en el corto plazo, sin haber asumido formalmente la presidencia de la república responden a su agenda de emergencia. El tiempo político es muy breve y ya comenzó a contar para él y su equipo. Este virtual presidente electo aspira

a fijar un cierto periodo de tregua hasta el mes de octubre, fundamentalmente para poder atender los compromisos financieros y crediticios internacionales de su país. El cronómetro del escaso tiempo político con que cuenta Fujimori también ha empezado a funcionar en el frente interno. Atenazado por las presiones de las FFAA y de la Iglesia católica sobre su proyecto de pacificación y política religiosa, ha dado muestras de debilidad e indecisión. Sus relaciones con las organizaciones empresariales como la CONFIEP siguen siendo tensas, por estar atravesadas por sus lealtades al FONAPI, pero tienden a mejorar toda vez que la asesoría de Hernán de Soto garantizará hasta cierto punto una mejor relación con la banca e instituciones de crédito internacional. Tanto el FMI por mediación de Pérez de Cuéllar, como el BM, ha ofertado ciertas modalidades de ayuda crediticia bajo determinadas condiciones. Sin embargo, se estima que no podrán llegar con la oportunidad que el nuevo gobierno amerita.

El próximo desembalse de precios —en un orden cercano al 300%— que Fujimori demanda para ajustar los costos de los combustibles, de ciertos productos de primera necesidad y de los servicios públicos, han puesto en estado de alerta a las organizaciones populares. Por su lado, las izquierdas y el APRA, que harán mayoría en las cámaras de diputados y senadores, han marcado ya sus distancias frente al plan de emergencia del ingeniero Fujimori.

La hiperinflación de casi 3 mil por ciento, piensa ser abatida a través de un paquete de medidas convergentes: suspender las emisiones de dinero, fijar un tipo cambiario único en paridad con una nueva moneda de plata, rectificar la política crediticia y liberar gradualmente las medidas de protección arancelaria. La reforma tributaria que pretenderá llevar a cabo el nuevo gobierno para ampliar la base exigua de 300 mil contribuyentes, cuya aportación ha descendido al 4 por ciento del Producto Interno Bruto, levantará tanto polvo en las cámaras como sus otras propuestas. Su voluntad de buscar la concertación política en el parlamento no basta. Los partidos políticos de las derechas y las izquierdas tienen mayor interés en establecer compromisos más amplios y duraderos, que en negociar pragmáticamente medida por medida para favorecer a tan vulnerable poder ejecutivo.

Sólo un recrudescimiento de la insurgencia guerrillera podría servir de palanca para favorecer al ejecutivo con facultades extraordinarias en materia legislativa, pero esta fórmula gastada por el belaudismo, no será otorgada esta vez por las mayorías parlamentarias como un cheque en blanco. El ejercicio gubernamental forzará a Fujimori y a Cambio 90, a una redefinición de su plan de gobierno, lo cual podría resquebrajar sus todavía frágiles lazos con los informales pero también con las iglesias evangélicas. Por lo pronto, Cambio 90 ha eviden-

¹⁸ *El Nacional*, núm. 1887, Lima, 11 de junio de 1990, pp.12-13.

ciado sus primeras grietas orgánicas; el secretario general Hanna se ha enfrentado a Fujimori con el apoyo de algunas bases, desconociéndose los términos de este precoz e inoportuno factionalismo político. Habrá que darle tiempo, unos meses tal vez, para visualizar las tendencias de su praxis gubernamental.

Un matiz interesante de la propuesta de gobierno de Fujimori, radica en el énfasis puesto en la pequeña y mediana industria como pivote estratégico del desarrollo industrial, así como de la generación y ahorro de divisas, a las cuales piensa respaldar con garantías y estímulos si no le sale al paso la CONFIEP. La valoración de Fujimori sobre las cuatro ramas de la industria marginal así lo reafirma: "Una es la pequeña y mediana minería. Otra es la pesquería. Ambas no generan presiones inflacionarias pero sí divisas. En tercer lugar, la agricultura, que procuraremos vigorizar al máximo, como fuente ahorradora de divisas. De ahí el planteamiento de eliminar los subsidios a los productos alimenticios de importación. En cuarto lugar, tenemos al sector informal y a la pequeña y mediana industrias que son generadoras de empleos".¹⁹

La estrategia de desarrollo industrial que oferta Fujimori marca un punto de deslinde con la propuesta del Fredemo. Según el propio líder de Cambio 90, mientras que para el Fredemo se trataba de

abrir el mercado peruano a las importaciones extranjeras sin ningún tipo de restricciones, Cambio 90 propone sostener una política arancelaria gradual y temporal que le otorgue márgenes de maniobra y expansión industrial a los empresarios nacionales.

En política internacional, Alberto Fujimori ha apelado al país de sus padres. Sin embargo, el Japón se ha mantenido con mucha cautela frente a las peticiones del candidato electo. Este país tradicionalmente opta por bloquear inversiones en países afectados por la insurgencia guerrillera. No obstante, no se descartan ciertas posibilidades de ayuda crediticia y técnica.

Fujimori ha apelado también a lo ONU para que el Perú sea declarado país del Cuarto Mundo, dado el estado ruinoso de su economía y el avanzado deterioro de las condiciones de existencia de la mayoría de su población. La propuesta cuartomundista de Fujimori se sitúa en la perspectiva de lograr una mesa de donantes con el fin de recuperar su inserción en la comunidad financiera internacional en el más corto plazo. En los hechos, independientemente de que la ONU discuta o no su petición de cambio de identidad entre los países en vías de desarrollo, el Perú se ubica sin lugar a dudas, entre los primeros países de este cuarto mundo que nos enrostra el fin del milenio.



¹⁹ *Ibidem*.